

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Justificación de la reforma

Los derechos otorgados a los ciudadanos por los artículos 24 y 25 de la Constitución son corolario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho, tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental.

En lógica coherencia con los contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artículo 119 del propio texto constitucional previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Con todo ello, nuestra Norma Fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos.

Suprimidas por la Ley 25/1986 las tasas judiciales, el núcleo de los costes económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención en el mismo, por imperativo legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos.

En efecto, una vez que el Estado ha renunciado a la percepción de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial, son los honorarios de abogados, de procuradores y, en su caso, de cualesquiera otros profesionales, así como el coste de la obtención de las pruebas documentales o periciales necesarias, los que implican un coste económico inasumible para los ciudadanos que no disponen de los recursos económicos necesarios para hacerles frente.

La previsión constitucional del artículo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artículos 20.2 y 440.2 recoge el mandato constitucional y remite, para la regulación del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria.

ACT 1/1996, OF 10th JANUARY, ON LEGAL AID
[~]

RECITAL OF MOTIVES [~]

1. Need to reform [~]

The rights citizens are granted under Articles 24 and 25 of the Constitution are an evident corollary of the social or welfare conception of the Democratic Rule of Law, as configured by our Fundamental Law. [~]

In logical coherence with the content of these constitutional provisions, and in order to ensure all persons access to effective judicial remedy, Article 119 of the text of the Constitution foresees that Justice shall be free when so provided by law and, in all cases, with regard to those who provide evidence of having insufficient means to have recourse to the Courts of Law. [~]

In this way this, our Fundamental Law designs a constitutional framework that regulates the right to judicial remedy that includes the assistance of the State aimed at providing the necessary means to make this a real, effective right, even when the person wishing to exercise it lacks financial means. [~]

Following abolition of judicial fees by Act 25/1986, the core of the economic costs arising from recourse to the Courts of Law is determined by intervention therein, by legal requisite and on most occasions, of professionals specialised in the defence and representation of legitimate rights and interests. [~]

Indeed, once the State has renounced receipt of any sum for access to its judicial system, it is the fees of solicitors, barristers-at-law and, when appropriate, of any other professionals, as well as the cost of obtaining the necessary documentary or expert witness evidence, which imply a financial cost which is unaffordable for citizens who do not have the necessary financial means to cover it. [~]

The constitutional provision of Article 119 has already been subject to partial implementation by Organic Act 6/1985, on the Judiciary, that reflects the constitutional mandate in Articles 20.2 and 440.2 thereof and remits to the ordinary law for regulation of the legal aid system. [~]

En virtud de esta reserva de ley, corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos.

2. Vocación unificadora

A esa finalidad responde la presente Ley, cuyo objeto es regular un sistema de justicia gratuita que permita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos.

Se trata, pues, de una ley cuyos beneficiarios y destinatarios directos son todos los ciudadanos que pretendan acceder a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de su situación económica.

La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos.

Frente a la dispersa legislación procesal que hasta ahora ha regulado la justicia gratuita, esta norma viene a unificar en sí misma el nuevo sistema legal de justicia gratuita; así pues, tal y como fue entendido por la Cámara Baja al aprobar por unanimidad en su sesión celebrada el 10 de mayo de 1994 la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ratificada por la Resolución de 9 de febrero de 1995, la presente Ley regula un sistema único, concentrado en una sola norma, con las lógicas consecuencias de claridad y certeza que redundan, en definitiva, en un incremento de la seguridad jurídica.

3. Ampliación del contenido material del derecho

Al objeto de remover los obstáculos que impiden que los ciudadanos más desprotegidos accedan a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, la presente Ley opera una notable transformación en el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita, configurándolo de forma más amplia.

By virtue of that legal reserve, it is the remit of the ordinary legislator to fulfil the constitutional mandate articulated in a legal aid system for those who lack means. [~]

2. Consolidation purpose [~]

To that end, it is the task of this Act, the object of which is to regulate a legal aid system to allow citizens who prove financial eligibility to have the necessary professionals to obtain effective judicial remedy and to have their legitimate rights and interests adequately defended. [~]

It is thus a law whose direct beneficiaries and receivers are all citizens who wish to obtain effective judicial remedy and whose access thereto is hindered by their financial situation. [~]

The aim is thus to guarantee access to Justice under equal conditions to all citizens. [~]

Faced with the dispersed procedural legislation that has regulated legal aid up to present, this regulation comes to unify the new free legal justice system within it. Thus, in the very manner in which it was understood by the Lower House of Parliament that unanimously approved a motion arising from the question put by the Federal Parliamentary Group Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya at its session held on the 10th May 1994, that was ratified by Resolution of 9th February 1995, this Act regulates a sole system, concentrated in a single legal instrument, with the logical consequences of clarity and certainty that, in conclusion, lead to an increase in legal security. [~]

3. Extension of the substantive content of the benefit [~]

In order to remove the obstacles that prevent disadvantaged citizens from obtaining access to effective judicial remedy under equal conditions, this Act brings about a notable transformation in the substantive content of the benefit of legal aid, configuring it in a more ample manner. [~]

En efecto, frente a los beneficios hasta ahora recogidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, el nuevo sistema configura un derecho más completo y por tanto más garantizador de la igualdad de las partes en el proceso, eliminando onerosidades excesivas que no son sino negaciones prácticas de aquélla; así pues, a los beneficios ya consagrados por nuestro ordenamiento jurídico como propios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la Ley añade nuevas prestaciones tales como el asesoramiento y la orientación previos a la iniciación del proceso -lo cual ha de evitar en numerosas ocasiones litigios artificiales tan costosos en todos los sentidos para la Justicia-, la asistencia pericial en el mismo y la reducción sustancial del coste para la obtención de escrituras y documentos notariales y de aquellos documentos emanados de los Registros Públicos, que puedan ser precisos para las partes en el proceso.

4. El reconocimiento del derecho

De igual modo, la Ley supone un paso más en la protección de esos ciudadanos más desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus derechos.

Bajo la amplia libertad de configuración legal que se deriva del artículo 119 de la Constitución Española - libertad que nuestro Tribunal Constitucional ya reconoció expresamente-, la presente Ley llega más lejos que el sistema anterior al adoptar los criterios para reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita, estableciendo un doble mecanismo: por un lado, un criterio objetivo para el reconocimiento del derecho, basado en la situación económica de los solicitantes, y complementado por un mecanismo flexible de apreciación subjetiva acorde con nuestra jurisprudencia constitucional, que posibilita efectuar el reconocimiento excepcional del derecho a personas cuya situación económica excede del módulo legal pero que, sin embargo, afrontan unas circunstancias de una u otra índole que deben ser ponderadas y que hacen conveniente ese reconocimiento.

En estos segundos supuestos excepcionales, y he aquí precisamente la diferencia con el régimen que la Ley de Enjuiciamiento Civil tenía establecido hasta hoy, la extensión del derecho puede llegar a ser total, incluyendo todas las prestaciones que lo integran.

Indeed, compared with the benefits provided by the Civil Procedure Act up to present, the new system configures a more complete benefit and thus one that better guarantees the equality of the parties in the proceedings, eliminating excessive expenses that are nothing other than the practical negation thereof; thus, in addition to the benefits already enshrined by our legal order as its own, such as the benefit of legal aid, the Act provides new services such as advice and orientation prior to commencing the proceedings, that must on many occasions avoid artificial disputes that are so costly in all senses to Justice; expert witness assistance thereat and a substantial reduction of the cost of obtaining public deeds and notarial documents and of the documents issued by the Public Registries, which may be required by the parties in the proceedings. [~]

4. Recognition of the benefit [~]

The Act also implies a further step in protection of those disadvantaged citizens who require access to judicial remedy to satisfy their legitimate claims or have their rights defended. [~]

Under the ample freedom of legal configuration that arises from Article 119 of the Spanish Constitution - a freedom that our Constitutional Court has already specifically recognised -this Act goes further than the previous system in adopting criteria to recognise the benefit of legal aid, establishing a double mechanism. On one hand, there is an objective criterion for recognition of the benefit, based on the financial status of the applicants, and complemented by a flexible mechanism of subjective appreciation in keeping with our constitutional case law, that enable the granting of exceptional recognition of the benefit to persons whose financial circumstances exceed the legal module, but who, nevertheless, are facing circumstances of one kind or another that must be taken into consideration and that make such a recognition appropriate. [~]

In these second exceptional cases, and this is precisely where the difference with the system established in the Civil Procedure Act up to now lies, extension of the benefit may even become total, including all the services forming it. [~]

Sin perjuicio de todo lo anterior, quedará siempre garantizado el derecho de los interesados a la libre designación de abogado y procurador.

5. Actuación administrativa

A pesar de que la evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita no es en sentido estricto una función jurisdiccional, así se ha mantenido tradicionalmente en nuestra legislación procesal.

Lejos de esa concepción, constituye esencial propósito de la Ley la «desjudicialización» del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, optándose así por las más modernas pautas que configuran dicha función como una actividad esencialmente administrativa.

La traslación del reconocimiento del derecho a sede administrativa responde a dos motivos: en primer término, se descarga a los Juzgados y Tribunales de una tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional y, en segundo lugar, se agiliza la resolución de las solicitudes de los ciudadanos mediante una tramitación sumaria y normalizada.

El reconocimiento del derecho pasa, por tanto, a convertirse en una función que descansa sobre el trabajo previo de los Colegios profesionales, que inician la tramitación ordinaria de las solicitudes, analizan las pretensiones y acuerdan designaciones o denegaciones provisionales, y, por otra parte, sobre la actuación de unos nuevos órganos administrativos, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, como órganos formalmente responsables de la decisión final, y en cuya composición se hallan representadas las instancias intervinientes en el proceso.

No quiere ello decir que los órganos jurisdiccionales pierdan todo su peso en el reconocimiento, ya que la Ley garantiza suficientemente el control judicial sobre la aplicación efectiva del derecho, habilitando a aquéllos para decidir sobre el mismo, en vía de recurso.

6. Financiación pública

Notwithstanding all the foregoing, the right of the parties concerned to the free appointment of a solicitor and of a barrister-at-law shall always be guaranteed. [~]

5. Administrative activity [~]

In spite of evaluation of fulfilment of the requisites to enjoy the benefit of legal aid not being, in a strict sense, a jurisdictional function, it has traditionally been maintained within our procedural legislation. [~]

Far from that conception, it is an essential purpose of this Act to “de-judicialise” the procedure to recognise the benefit of legal aid, thus opting for more modern guidelines that configure that function as an essentially administrative activity. [~]

There are two reasons for transferring recognition of the benefit to the Administration: firstly, to remove the burden of this task from the Courts of Law, a task that lays outside the exercise of the purely jurisdictional function pursuant to the Constitution and, secondly, decisions of the applications by citizens are expedited by a summary, standardised processing. [~]

Recognition of the benefit thus involves it becoming a function that rests upon prior work by the Official Professional Associations, which initially process the applications, analyse the claims and decide on provisional granting or refusal and, on the other hand, regarding the action of new administrative agencies, the Legal Aid Commissions, as the bodies formally responsible for the final decision, in the composition whereof the instances involved in the process are represented. [~]

This does not mean that the Courts of Law lose all their importance in the recognition, as the Act sufficiently guarantees judicial control over effective implementation of the right, enabling them to decide thereon if an appeal is lodged. [~]

6. Public financing [~]

Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema rápido y eficaz de justicia gratuita se articula, como hasta ahora, sobre la base de un servicio público, prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos igualmente públicos.

De hecho, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento del servicio por la sola obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos; esta jurisprudencia ha dejado claramente establecida la responsabilidad pública en tal sentido, como deber positivo del Estado de garantizar el derecho de acceso a la Justicia o, lo que es lo mismo, a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que es.

Ello conduce a la obligación de establecer mecanismos de control que aseguren el adecuado destino de los fondos públicos asignados al servicio, de tal forma que no se beneficien de dichos fondos quienes no precisen de asistencia alguna.

Así pues, la Ley fija los criterios básicos de la financiación del servicio, cuyo coste deberá ser periódicamente evaluado por los poderes públicos, que en todo caso deberán seguir el principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables.

Tanto lo relativo a la financiación, como las reglas referentes a la prestación y funcionamiento del servicio se conciben con la flexibilidad y generalidad propias de una norma de rango legal, que habrán de permitir que su desarrollo por normas de rango inferior facilite el adecuado ajuste a las cambiantes situaciones económicas y sociales, evitando así la petrificación del ordenamiento y la consagración en normas con la rigidez legal de materias que, por su propia naturaleza, son susceptibles de sucesivas transformaciones en muy poco tiempo.

Tal regulación reglamentaria fue llevada a cabo con carácter urgente, y como paso inicial y transitorio de la actual reforma del sistema de justicia gratuita, mediante el Real Decreto 108/1995, de 27 de enero, sobre medidas para instrumentar la subvención estatal a la asistencia jurídica gratuita.

7. Ordenación competencial

This legal aim to provide citizens who require it a swift, effective means of legal aid, is articulated, as up to now, on the basis of a public service provided by Solicitors and Barristers-at-law, financed by funds that are also public. [~]

In fact, pursuant to the case law of the European Court of Human Rights and our own Constitutional Court, the State is responsible for correct operation of the service due to the simple constitutional obligation of providing a defence for those who lack means; that case law has clearly established that the public responsibility in that sense, as a positive duty of the State to guarantee the right of access to Justice or, what is the same, to effective judicial remedy, as the fundamental right that it indeed is. [~]

This leads to the obligation to establish control mechanisms that assure adequate use of the public funds assigned to the service, so those who do not require any aid whatsoever do not benefit from those funds. [~]

Thus, the Act sets the basic criteria for financing of the service, the cost of which must be periodically evaluated by the public authorities that in all cases must follow the principle that the legal aid service must be appropriately and sufficiently remunerated, settling payments within reasonable time periods. [~]

Both the rules regarding financing, as well as rules on provision and operation of the service, are conceived with the flexibility and general nature inherent to a regulation with the authority of Parliament, permitting the implementation thereof by means of regulations of a lower rank to facilitate adequate adjustment to changing financial and social situations, thus avoiding freezing the regulatory framework and its embodiment in provisions with the legal rigidity of matters that, due to their very nature, are liable to successive transformations in a very short time. [~]

Such implementing regulations were approved on an urgent basis, and as an initial, transitional step to the present reform of the legal aid system, by means of Royal Decree 108/1995, of 27th January, on measures to implant the State subsidy of legal aid. [~]

7. Ordering of powers [~]

La Ley resulta, en fin, respetuosa con la ordenación competencial que deriva de nuestra Norma Fundamental y de los Estatutos de Autonomía, explicitando los títulos competenciales que, de conformidad con las reglas 3.^a, 5.^a, 6.^a y 18.^a del artículo 149.1 de la Constitución Española, habilitan al Estado para establecer la nueva regulación, y permitiendo que ésta pueda complementarse con naturalidad con las normas que dicten las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias estatutarias.

CAPITULO I

Derecho a la asistencia jurídica gratuita

Artículo 1.

Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad.

Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, así como el asesoramiento previo al proceso contemplado en el artículo 6.1.

Artículo 2.

Ambito personal de aplicación.

En los términos y con el alcance previstos en esta Ley y en los Tratados y Convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:

a) Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan legalmente en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso.

c) Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:

1.^º Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 4.^º de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, reguladora de las Asociaciones.

2.^º Fundaciones inscritas en el Registro administrativo correspondiente.

d) En el orden jurisdiccional social, para la defensa en juicio, además, los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.

To conclude, the Act is respectful with the distribution of powers deriving from our Fundamental Law and the Statutes of Autonomy, detailing the titles on which such powers are based that, pursuant to Rules 3, 5, 6 and 18 of Article 149.1 of the Spanish Constitution, empower the State to establish a new regulation thereof and allowing such a regulation to naturally complement with the rules handed down by the Autonomous Communities in exercise of their statutory powers. [~]

CHAPTER I [~]

Right To Legal Aid [~]

Article 1. [~]

Object of the Act [~]

The object of this Act is to determine the content of the benefit of legal aid referred to in Article 119 of the Constitution and to regulate the procedure for its recognition and effectiveness. [~]

The provisions of this Act shall be generally applicable to all kinds of judicial proceedings, including appeals for constitutional protection, as well as advice prior to the proceedings provided in Article 6.1. [~]

Article 2. [~]

Personal scope of application1 [~]

Pursuant to the provisions and with the scope foreseen in this Act and in the treaties and international conventions on the matter to which Spain is a party, the following shall be entitled to legal aid: [~]

a) Spanish citizens, nationals of the other Member States of the European Union and aliens who are in Spain, if they provide evidence of financial eligibility; [~]

b) The Social Security Management Agencies and Common Services, in all cases; [~]

c) The following legal persons, if they provide evidence of financial eligibility: [~]

Associations of public utility, foreseen under Article 32 of Organic Act 1/2002, of 22nd March, that regulates the Right to Association; [~]

Foundations registered in the relevant Public Register. [~]

d) Additionally, in the social jurisdictional order, workers and Social Security beneficiaries, both as defendants and as plaintiffs to exercise actions for effectiveness of labour rights in insolvency proceedings. [~]

e) En el orden jurisdiccional penal, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español.

f) En el orden contencioso-administrativo así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo.

Artículo 3.

Requisitos básicos.

1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.

2. Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes: a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.

b) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.

3. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.

4. El derecho a la asistencia jurídica gratuita sólo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios.

Likewise, the benefit of legal aid is recognised for workers and Social Security beneficiaries for disputes arising on these matters before the contentious administrative order. e) In the contentious-administrative order, as well as in the prior administrative channel, aliens who provide evidence of financial eligibility shall be entitled to legal aid and defence and representation in the proceedings that may lead to them being refused entry to Spain, to them being deported or expelled from Spanish territory, and in all proceedings in asylum-related matters. [~]

f) In cross-border disputes in civil and commercial matters, the individuals mentioned in Chapter 8 hereof, pursuant to the provisions established therein. [~]

Article 3. [~]

Basic requisites [~]

The benefit of legal aid shall be recognised to those natural persons whose means and financial income, calculated annually from all sources and by family unit, do not exceed double the minimum interprofessional salary in force at the moment of making the application. [~]

2. The family unit modes are as follows: a) Those formed by spouses who are not legally separated and, if any, the minor children, with the exception of those who are emancipated; b) [~]

Those formed by a parent and the children who fulfil the requisites stated in the preceding rule. [~]

3. However, the financial means may be assessed individually when the applicant provides sufficient evidence of the existence of contrary family interests in the litigation for which an application for aid is filed. [~]

4. The benefit of legal aid may only be recognised for those litigating in defence of their own rights or interests. [~]

5. En el supuesto del apartado 2 del artículo 6, no será necesario que el detenido o preso acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éste deberá abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención. 6. Tratándose de las personas jurídicas mencionadas en el apartado c) del artículo anterior, se entenderá que hay insuficiencia de recursos económicos para litigar, cuando su base imponible en el Impuesto de Sociedades fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

Artículo 4.

Exclusión por motivos económicos.

A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que éste dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la Ley.

La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida habitualmente, no constituirá por sí misma obstáculo para el reconocimiento del derecho, siempre que aquélla no sea suntuaria.

Artículo 5.

Reconocimiento excepcional del derecho.

5. In the case of Section 2 of Article 6, it shall not be necessary for the detainee or prisoner to provide sufficient evidence initially of lack of means, notwithstanding the fact that, should he subsequently not be recognised the benefit of legal aid, he must pay the Solicitor the fees accrued for his intervention. Nor shall it be necessary for the victims of domestic violence nor victims of terrorism, to provide sufficient initial evidence that they lack means when applying for specialised free legal defence, in which case they shall be provided this immediately, notwithstanding the fact that, if they are subsequently not recognised the benefit thereto, they must pay the Solicitor, and the Barrister-at-law when one intervenes, the fees accrued.² In the case of the legal persons mentioned in Paragraph c) of the preceding Article, there shall be understood that they are financially eligible when their taxable base for Corporation Tax is lower than a sum equivalent to triple the interprofessional minimum annual salary.
[~]

Article 4. [~]

Exclusion for financial reasons [~]

In order to check the insufficiency of means for litigation, one must also take into account the income and other assets or circumstances declared by the applicant, the external signs that manifest his real financial capacity, legal aid being refused if those signs, in contrast to what is stated by the applicant, provide evidence that he has financial means exceeding the limit set by the Act. [~]

The circumstance of the applicant being the owner of the home in which he usually resides shall not, in itself, constitute an obstacle to being recognised the benefit, as long as it is not luxurious. [~]

Article 5. [~]

Exceptional recognition of the benefit³ [~]

En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación del proceso u otras deanáloga naturaleza, objetivamente evaluadas, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aún superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del cuádruplo del salario mínimo interprofesional.

Considering the circumstances of the applicant's family, number of children or relatives under his charge, state of health, his financial obligations, costs arising from initiating the proceedings, or others of a similar nature, evaluated in objective terms and, in any case, when the applicant holds the conditions of descendant of a special category numerous family, the Legal Aid Commission before which the application is made may exceptionally grant recognition to the benefit, by motivated resolution, for persons whose means and income, even while surpassing the limits established in Article 3, do not exceed four times the interprofessional minimum salary. [~]

En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente determinará expresamente qué beneficios de los contemplados en el artículo 6, y en qué proporción, son de aplicación al solicitante.

Under the same conditions as stated in the preceding paragraph, the benefit of legal aid may be recognised for the disabled persons stated in Article 1.2 of Act 51/2003, of 2nd December, on equal opportunities, non-discrimination and universal access for the disabled, as well as to those persons under their charge, when they act in proceedings on their behalf and in their interest.⁴ In such cases, the relevant Legal Aid Commission shall determine specifically what benefits, of those mentioned in Article 6, and in what proportion, may be assigned to the applicant. [~]

Artículo 6.

Contenido material del derecho.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.

Article 6. [~]

Substantive content of the benefit [~]

The benefit of legal aid encompasses the following benefits: [~]

Free advice and orientation prior to the proceedings, for those who want to claim judicial remedy of their rights and interests, when these have the object of avoiding procedural conflict, or of analysing the feasibility of the claim; [~]

2. Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.

To have a solicitor assist detainees or prisoners who have not appointed a solicitor, for any police proceedings that are not the consequence of ongoing criminal proceedings, or at first appearance before a jurisdictional body, or when this is carried out by means of jurisdictional assistance and the detainee or prisoner has not appointed a solicitor at the place where it is provided; [~]

3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

Free defence and representation by a solicitor and a barrister-at-law in judicial proceedings, when intervention by these professionals is legally required or, when it is not, it is specifically required by the Court of Law by means of a reasoned order to guarantee the equality of the parties in the proceedings; [~]

4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
5. Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o Tribunal lo estima pertinente en resolución motivada, a cargo de peritos que, por insaculación, sean designados entre los técnicos privados que correspondan.
7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.
8. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
9. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional.
- Artículo 7.
Extensión temporal.
- Free insertion of announcements or edicts, in the course of the process, which are required to be published in official newspapers; [~]
- Exemption from payment of the necessary deposits to lodge appeals; [~]
- Free expert witness evidence service in the proceedings, performed by the technical personnel assigned to the jurisdictional bodies or, failing that, performed by civil servants, bodies or technical services that report to the Public Administrations; Exceptionally, and when, due to non-existence of technical experts in the matter concerned, it is not possible for assistance to be provided by experts employed by the jurisdictional bodies or the Public Administrations, this shall be carried out, if the Court of Law deems it appropriate, in a justified resolution, by experts appointed pursuant to the terms established by the procedural laws, from among the relevant private technical experts;⁵ [~]
- Free issuance of copies, attestations, instruments and notarial certificates, pursuant to the provisions contained in Article 130 of the Notarial Regulations; [~]
- Reduction of 80 per cent on the tariff fees for granting of public deeds and for obtaining copies and notarial attestations not covered by the preceding Section, when these are directly related to the proceedings and are required by the Court of Law during the course thereof, or when these are of use as the basis of the claims by the beneficiary of legal aid; [~]
- Reduction of 80 per cent on the tariff fees to obtain notes, certifications, annotations, entries and inscriptions at the Land and Business Registries, when these are directly related to the proceedings and are required by the Court of Law during the course thereof, or that act as the basis for the claims by the beneficiary of legal aid; [~]
- The tariff fees referred to in sections 8 and 9 of this Article shall not be received when the person concerned provides sufficient evidence of his income being under the interprofessional minimum salary. ⁵ th Section 6 of Article 6, amended by Final Provision Fifteen of Act 1/2000, of 7January, on Civil Procedure. [~]
- Article 7. [~]
- Time scope [~]

1. La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto.

2. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia, aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo 32 de la presente Ley.

3. Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el apartado anterior corresponda a un órgano jurisdiccional cuya sede se encuentre en distinta localidad, el Juzgado o Tribunal, una vez recibido el expediente judicial, requerirá a los respectivos Colegios la designación de abogado y procurador de oficio ejercientes en dicha sede jurisdiccional.

Artículo 8.

Insuficiencia económica sobrevenida.

No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su contestación, salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación, respectivamente.

Cuando el actor o el demandado pretendan el reconocimiento del derecho en la segunda instancia sin haberlo solicitado en la primera, deberán acreditar ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el curso de la primera instancia o con posterioridad a ella.

La misma regla será aplicable al que pretenda el reconocimiento del derecho para interponer o seguir el recurso de casación respecto de la segunda instancia.

CAPITULO II

Competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita

Artículo 9.

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Legal aid during the course of a same instance shall encompass all the stages and incidents thereof, including enforcement, but it may not be applied to different proceedings. [~]

The benefit of legal aid shall be maintained for the filing and successive stages of appeals against the resolutions that put an end to the proceedings at the relevant instance, in which case the provisions contained in Article 32 hereof shall apply. [~]

When the competence to examine the means referred to in the preceding Paragraph lies with a jurisdictional body that has its seat in a different location, once the Court Clerk has received the judicial dossier, he shall require the respective Professional Associations to appoint a duty solicitor and barrister-at-law registered to practice in that jurisdictional district⁶. [~]

Article 8. [~]

Subsequent financial insufficiency [~]

The plaintiff shall not be recognised the benefit of legal aid once the suit has been lodged, nor shall the defendant once he has replied thereto, except if in his application he provides sufficient evidence to the Legal Aid Commission that the necessary circumstances and conditions to obtain it arose after the suit or response, respectively. [~]

When the plaintiff or defendant applies for recognition of the benefit at the second instance, without having applied for it at the first, he must provide sufficient evidence to the Legal Aid Commission that the necessary circumstances and conditions arose during the course of the first instance, or after it. [~]

The same rule shall be applicable to those aiming to obtain recognition of the benefit to lodge or to follow through a cassation appeal with regard to the second instance. [~]

CHAPTER II [~]

Competence And Procedure To Recognise The Benefit Of Legal Aid [~]

Article 9. [~]

Legal Aid Commission.⁷ [~]

En cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno o más partidos judiciales, se constituirá una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, como órgano responsable, en su correspondiente ámbito territorial, de efectuar el reconocimiento del derecho regulado en la presente Ley.

Artículo 10.

Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. 1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estarán presididas por un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial, e integradas además por el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por dos miembros que designen las Administraciones públicas de las que dependen, actuando uno de ellos como Secretario.

2. En las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la Administración General del Estado, los miembros a los que se refiere el último inciso del apartado anterior, serán los siguientes: un Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia e Interior perteneciente a Cuerpos o Escalas del Grupo A, que además actuará como Secretario.

A Legal Aid Commission shall be set up in each provincial capital, in the cities of Ceuta and Melilla and on each island where there are one or more judicial districts, as the body responsible, within the relevant area, for recognition of the benefit regulated by this Act. However, the competent body of the Autonomous Community may determine assign to the Commission a different area. Likewise, with regard to the Courts of Law with nationwide competence, a Central Legal Aid Commission reporting to the General State Administration shall be set up in the Capital of the State. [~]

Article 10. [~]

Composition of the Legal Aid Commissions. 8 The Central Legal Aid Commission shall be chaired by a member of the Public Prosecutor's Office, appointed by the Director of Public Prosecutions and formed by the Dean of the Law Society and of the Bar Association of Madrid, or the Solicitor or Barrister-at-law they may appoint, a Public Prosecutor and a Civil Servant from the Ministry of Justice belonging to a Group A Corps or Scale, who shall also act as Secretary. The Legal Aid Commissions reporting to the Autonomous Communities shall be formed by a member of the Public Prosecutor's Office, appointed by the Head Prosecutor of the High Court of Justice or the Provincial Court, and also formed by the Dean of the Law Society and of the Bar Association, or the Solicitor or Barrister-at-law they may appoint, and by two members appointed by the Public Administrations to which they report. [~]

The competent body of the Autonomous Community shall determine who of its members shall act as Chairperson and Secretary. [~]

En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados o de Procuradores, el representante de estas Corporaciones en la Comisión se designará de común acuerdo por los Decanos de aquéllos.

Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen, podrán crearse delegaciones de la Comisión provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, con la composición y ámbito de actuación que reglamentariamente se determinen y garantizando, en todo caso, la homogeneidad de criterios para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Artículo 11.
Funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados.

El Ministerio de Justicia e Interior prestará el soporte administrativo y el apoyo técnico necesarios para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la Administración General del Estado.

Los Colegios de Abogados y de Procuradores pondrán a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, la lista de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación, en su caso, de especializaciones.

Artículo 12.
Solicitud del derecho.

El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su domicilio.

With respect to the Legal Aid Commissions that report to the General State Administration, the members from the Public Administration shall be a State Attorney and a Civil Servant who shall act as Secretary, belonging to a Group A Corps or Scale, posted to the relevant Territorial Management Agency of the Ministry of Justice or, failing that, a Civil Servant from the said Corps or Scales posted at the Governmental Delegation or Sub-delegation of the territory concerned.⁹ In provinces where there are more than one Law Society or Bar Association, the representative of these Corporations on the Commission shall be appointed by consensus by the Deans thereof. [~]

When the volume of matters or other justified circumstances make this advisable, Delegations of the Provincial Legal Aid Commissions may be established, with the composition and scope of action determined by the implementing regulations and guaranteeing, in all cases, the homogeneity of criteria to recognise the benefit to legal aid. [~]

Article 11. [~]

Operation of the Legal Aid Commissions [~]

Operation of the Legal Aid Commissions shall fulfil the provisions of Act 30/1992, of 26th November, on the Legal Regime of Public Administrations and the Common Administrative Procedure, for collegiate bodies. [~]

The Ministry of Justice and Internal Affairs shall provide the necessary administrative and technical support for operation of the Commissions that report to the General State Administration. [~]

The Law Societies and Bar Associations shall provide the Legal Aid Commissions the list of registered practicing professionals assigned to the legal aid services, indicating their specialisations when appropriate. [~]

Article 12. [~]

Application for the benefit. [~]

Application for recognition of the benefit of legal aid shall be lodged by the applicant before the Law Society of the place where the Court of Law that is to hear the main proceedings for which it is requested sits, or before the Court of the applicant's domicile. [~]

En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente.

Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente por cada uno de los interesados.

Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo una sola defensa o representación, deberán computarse, a efectos del reconocimiento del derecho, la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes.

En este caso, si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no sobrepasan el doble del salario mínimo interprofesional, se procederá a nombrar abogado y, en su caso, procurador del turno de oficio que deberán asumir la representación y defensa conjunta de todos ellos.

Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes superan el doble del salario mínimo interprofesional pero no alcanzan el cuádruple, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de los beneficios establecidos en el artículo 6 se otorgará a los solicitantes.

Artículo 13.

Requisitos de la solicitud.

En la solicitud se harán constar, acompañando los documentos que reglamentariamente se determinen para su acreditación, los datos que permitan apreciar la situación económica del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales y familiares, la pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio, si las hubiere.

Artículo 14.

Subsanación de deficiencias.

Si el Colegio de Abogados constatara que existen deficiencias en la solicitud o que la documentación presentada resulta insuficiente, lo comunicará al interesado, fijando con precisión los defectos o carencias advertidas y las consecuencias de la falta de subsanación, requiriéndole para que la complete en el plazo de diez días hábiles.

Transcurrido este plazo sin que se haya aportado la documentación requerida, el Colegio de Abogados archivará la petición.

Artículo 15.

Designaciones provisionales y traslados.

In the latter case, the Court of Law shall convey the application to the Law Society with territorial competence. [~]

In the event of concurrence of litigants in proceedings, recognition of the benefit of legal aid must be individually applied for by each one of the parties concerned. [~]

When, pursuant to the procedural laws, applicants must litigate under a sole defence or representation, the total amount of income and property assets of the applicants must be calculated for the purposes of recognising the benefit. [~]

In such case, if sufficient evidence were provided that the income and property of one of the applicants does not exceed double the minimum interprofessional salary, a solicitor shall be appointed and, if appropriate, a barrister-at-law on the legal aid roll, who must undertake the joint representation and defence of all concerned. [~]

If sufficient evidence were provided that the income and assets of each one of the applicants exceeds double the minimum interprofessional salary, but that amount does not reach the quadruple, the Legal Aid Commission may determine which of the benefits established in Article 6 shall be granted to the applicants. [~]

Article 13. [~]

Requisites of the application [~]

The application must contain, annexing the documents the regulations may determine to provide sufficient evidence thereof, the data that allow appreciation of the financial situation of the applicant and the members of his family unit, their personal and family circumstances, the claim the applicant wishes to make and the opposing party or parties in the dispute, if any. [~]

Article 14. [~]

Correction of deficiencies [~]

If the Law Society were to note that there are deficiencies in the application or that the documentation filed is insufficient, it shall so notify the applicant, stating the specific defects or shortfalls noted and the consequences of failing to correct these, requiring him to complete these within the term of ten working days. [~]

Once such term has elapsed without the required documentation being produced, the Law Society shall set aside the application. [~]

Article 15. [~]

Provisional appointments and notices [~]

Si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el peticionario se encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2 de esta Ley, el Colegio de Abogados, subsanados los defectos advertidos, procederá en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de abogado, comunicándolo inmediatamente al Colegio de Procuradores a fin de que, en caso de ser preceptivo, en el plazo máximo de tres días, se designe procurador que asuma la representación.

En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario no cumple las citadas condiciones, o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, notificará en el plazo de cinco días al solicitante que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado previsto en el párrafo anterior y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Del expediente correspondiente y las designaciones provisionales efectuados, se dará traslado en el plazo de tres días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución.

En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el plazo de quince días, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la cual, de modo inmediato, recabarán el expediente al Colegio de Abogados ordenando, al mismo tiempo, la designación provisional de abogado y procurador, si éste fuera preceptivo, y seguirá, posteriormente, el procedimiento fijado en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 16.

Suspensión del curso del proceso.

La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso.

If the application and the justifying documents provide sufficient evidence that the applicant is included within the scope defined in Article 2 of this Act, once the defects noted are corrected, the Law Society , shall proceed, within the maximum term of fifteen days, from receipt of the application by that Law Society or from the correction of the defects, to provisionally appoint a solicitor, immediately notifying the Bar Association thereof in order that, if necessary, within the maximum term of three days, the latter may appoint a barrister-at-law to take on the representation. [~]

If the Law Society considers that the applicant does not fulfil the said conditions, or that the main claim the application contains is manifestly unsustainable or groundless, it shall notify the applicant within the term of five days that it has not performed the provisional appointment of a solicitor foreseen in the preceding paragraph and it shall convey the application to the Legal Aid Commission. [~]

The relevant dossier and provisional appointments made shall be notified to the Legal Aid Commission within the term of three days, for it to verify and resolve upon. [~]

If the Law Society does not hand down any resolution at all within the term of fifteen days, the applicant may repeat the application before the Legal Aid Commission, which shall immediately obtain the dossier from the Law Society and order, at the same time, the provisional appointment of a solicitor and barrister-at-law, if the latter is required, and it shall subsequently follow the procedure set out in Article 17 of this Act. [~]

Article 16. [~]

Suspension of the course of the proceedings [~]

The application for recognition of the benefit of legal aid shall not suspend the course of the proceedings. [~]

No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Juez, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia.

Cuando la presentación de la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción, quedará ésta interrumpida siempre que dentro de los plazos establecidos en esta Ley no sea posible nombrar al solicitante abogado y, de ser preceptivo, procurador del turno de oficio que ejercent la acción en nombre del solicitante.

El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud.

En el supuesto de que esta petición hubiere sido denegada, fuere claramente abusiva y únicamente esté preordenada a dilatar los plazos, el órgano judicial que conozca de la causa podrá computar los plazos en los estrictos términos legalmente previstos, con todas las consecuencias que de ello se derive.

Artículo 17.

Resolución y notificación.

Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la Comisión podrá realizar las comprobaciones y recabar la información que estime necesarias.

However, in order to avoid the terms elapsing leading to foreclosure of a procedural step or to any of the parties not having a due legal process, the Court, acting on his own motion or at the request of any of the parties, may decree suspension until a decision is made on recognition or refusal of the benefit of legal aid, or on the provisional appointment of a solicitor and barrister-at-law if their intervention is a requisite or required in the interests of justice, provided the application for the benefit has been made within the terms set in the procedural laws¹⁰. [~]

When submission of the application for recognition of the benefit of legal aid is made prior to commencing the proceedings and the action may be damaged by prescription thereof, this shall be interrupted, as long as it is not possible to appoint a Solicitor for the applicant within the terms set under this Act and this is a requisite, or an officially appointed Barrister-at-law, to perform the actions on behalf of the applicant. [~]

When the action may be damaged by peremptory time limits elapsing, these shall be suspended until the definitive resolution is handed down in the administrative channel, recognising or refusing the benefit, at which time calculation of the terms shall recommence.¹¹ Calculation of the term of prescription shall recommence as from notification to the applicant of the provisional appointment of the solicitor by the Law Society or, when appropriate, from notification of the recognition or refusal of the benefit by the Legal Aid Commission and, in any case, within the term of two months from filing the application. [~]

In the event of the request being denied, it being clearly abusive and only being pre-ordered to extend terms, the Court of Law hearing the case may calculate the deadlines pursuant to the strict terms legally foreseen, with all the consequences arising therefrom. [~]

Article 17. [~]

Resolution and notification [~]

In order to verify the exactness and reality of the financial data declared by the legal aid applicant, the Commission may perform the checks and gather the information it may deem necessary. [~]

En especial, podrá requerir de la Administración Tributaria correspondiente la confirmación de la exactitud de los datos de carácter tributario que consten en la documentación de esta naturaleza presentada con la solicitud.

También podrá la Comisión oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situación económica del solicitante.

La Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, dictará resolución, en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la recepción del expediente por la Comisión, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita y, en el caso contemplado en el artículo 5, determinando cuáles de los beneficios son de aplicación a la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, así como a las partes interesadas y se comunicará al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado.

Si el Colegio de Abogados no hubiera dictado ninguna resolución, el silencio de la Comisión será positivo, procediendo a petición del interesado el Juez o Tribunal que conozca del proceso o si la solicitud se realiza con anterioridad a la iniciación del mismo el Juez Decano competente, a declarar el derecho en su integridad y a requerir a los Colegios profesionales la designación provisional de abogado y procurador, en su caso.

Ello sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal estimación presunta.

Artículo 18.
Efectos de la resolución.

In particular, it may require the relevant Tax Administration to confirm the exactness of the data of a tax nature that are recorded in the documentation of that nature submitted with the application. [~]

The Commission may also hear the counterparty or parties in the suit, or against whom the action is intended, when they are known and it is considered that they may provide data to ascertain the real financial situation of the applicant. [~]

Once the Commission has performed the above checks, it shall hand down a resolution, within the maximum term of thirty days, as from receipt of the dossier by it, recognising or refusing the benefit of legal aid and, in the case considered in Article 5, determining which of the benefits are applicable to the application. [~]

Should that term elapse without the Commission having specifically resolved upon the application, the decisions previously made by the Law Society and the Bar Association shall be deemed ratified, notwithstanding the obligation for the Commission to resolve pursuant to the provisions set forth in the Act on the Legal Regime of Public Administrations and the Common Administrative Procedure. [~]

Notification of the resolution shall be served within the common term of three days to the applicant, the Law Society and, when appropriate, the Bar Association, as well as the parties concerned, and the Court of Law hearing the proceedings shall be notified, or the Head Judge of their location, should these not have commenced. [~]

Should the Law Society not have handed down any resolution, silence by the Commission shall be deemed as granting the benefit, and the Court of Law hearing the case or, if the application is filed prior to its commencement, the competent Head Judge shall proceed to declare the full benefit and to require the Professional Associations to appoint provisionally a solicitor and a barrister-at-law, in the event. [~]

This shall be notwithstanding the result of eventual appeals lodged against such presumed granting. [~]

Article 18. [~]
Effects of the resolution [~]

El reconocimiento del derecho implicará la confirmación de las designaciones de abogado y de procurador efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales.

Si, por el contrario, la Comisión desestimara la pretensión, las designaciones que eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional, en los mismos términos previstos en el artículo 27 de esta Ley.

Artículo 19.

Revocación del derecho.

La declaración errónea, el falseamiento u occultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.

La revocación contemplada en el párrafo anterior llevará consigo la obligación del pago de todos los honorarios de abogado y procurador devengados desde la concesión del derecho, así como la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.

Artículo 20.

Impugnación de la resolución.

Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que, de modo definitivo, reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de Letrado, habrá de realizarse por escrito y de forma motivada, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Este remitirá el escrito de impugnación, junto con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de ésta, al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.

Recognition of the benefit shall imply confirmation of the appointments of solicitor and barrister-at-law performed provisionally by the Professional Associations. [~]

If, on the contrary, the Commission were to reject the claim, the appointments that may have eventually been made shall be revoked and the applicant must, in the event, pay the fees and charges arising from intervention by the professionals appointed provisionally, pursuant to the same provisions foreseen in Article 27 of this Act. [~]

Article 19. [~]

Revocation of the benefit [~]

A mistaken or false declaration or concealment of data by the legal aid applicants that have been decisive for the recognition of the benefit, shall give rise, in all cases, to the revocation thereof by the Legal Aid Commission, which shall have the power of review on its own motion for such purposes. [~]

The revocation considered in the preceding paragraph shall involve the obligation to pay all the solicitors' and barristers-at-law' fees accrued as from the benefit being granted, as well as the equivalent amount to the cost of the other services obtained due to that granting, notwithstanding the pertinent responsibilities of another order that may be appropriate. [~]

Article 20. [~]

Challenging a resolution [~]

Those who are entitled to a right or have a legitimate interest may challenge resolutions that definitely recognise or refuse the benefit of legal aid. [~]

Such a challenge, for which intervention by a Solicitor shall not be required, must be made in writing and be reasoned, within the term of five days from notification of the resolution, or from when it becomes known to any of the parties with the right to file it, to the Secretary to the Legal Aid Commission. [~]

The Secretary shall convey the challenge, along with the relevant dossier on the resolution impugned and a certification of this, to the competent Court of Law, or to the Head Judge so it may be distributed, if the proceedings have not commenced. [~]

Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el párrafo anterior, el Juez o Tribunal citará de comparecencia a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los ocho días siguientes y, tras oírles y practicar la prueba que estime pertinente en el plazo de los cinco días siguientes, dictará auto en el plazo de los cinco días siguientes manteniendo o revocando la resolución impugnada.

El Juez o Tribunal competente para conocer de la impugnación, en el auto por el que resuelva sobre la misma podrá imponer a quien la hubiere promovido de manera temeraria o con abuso de derecho, una sanción pecuniaria de cinco mil a cincuenta mil pesetas.

Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal no cabrá recurso alguno.

Artículo 21.

Requerimiento judicial de designación de abogado y procurador.

Si, conforme a la legislación procesal, el órgano judicial que esté conociendo del proceso estimara que, por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos, dictará una resolución motivada requiriendo de los Colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad.

Dicha resolución se comunicará por el medio más rápido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en los artículos precedentes.

CAPITULO III

Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas

Artículo 22.

Gestión colegial de los servicios de asistencia letrada, de defensa y de representación gratuitas.

Once the challenge and documents and certification referred to in the preceding paragraph have been received, the Court Clerk shall summon the parties to appear, as well as the State Attorney or Attorney of the relevant Autonomous Community when the Legal Aid Commission reports to it, within the following eight days and, after the Court of Law has heard them and obtained the relevant evidence within the term of five days following that, it shall hand down an order within the term of a further five days, maintaining or revoking the resolution challenged. [~]

The Court of Law that is competent to hear the challenge, may impose a fine in the order resolving thereon, upon those who file such in a reckless manner or abusing the law, amounting to 30 to 300 euros¹² . [~]

No appeal whatsoever may be lodged against the order handed down by the Court of Law. [~]

Article 21. [~]

Judicial requirement of appointment of solicitor and barrister-at-law [~]

If, pursuant to the procedural legislation, the Court of Law that is hearing the proceedings were to consider that, given the circumstances or urgency of the case, it is necessary to immediately assure the rights of defence and representation of the parties, and if any of these were to declare a lack of financial means, it shall hand down a reasoned resolution requiring the Professional Associations to provisionally appoint a solicitor and barrister-atlaw, when the appointments have not previously been made. [~]

The Court Clerk shall notify the Law Societies and Bar Associations of that resolution by the swiftest possible means; the application shall subsequently be processed pursuant to the provisions contained in the preceding Articles.¹³ [~]

CHAPTER III [~]

Organisation Of The Services Of Free Legal Advice, Defence And Representation [~]

Article 22. [~]

Management of the services of free legal advice, defence and representation by the professional associations. [~]

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición.

Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones.

Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes.

Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.

Artículo 23.

Autonomía profesional y disciplina colegial.

Los profesionales inscritos en los servicios de justicia gratuita, a los que se refiere esta Ley, desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.

Artículo 24.

Distribución por turnos.

Los Colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales de oficio.

Dichos sistemas serán públicos para todos los colegiados y podrán ser consultados por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.

Los Colegios de Abogados, salvo aquéllos en los que por la reducida dimensión de la actividad no sea necesario, constituirán turnos de guardia permanente para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido.

Artículo 25.

Formación y especialización.

The General Councils of the Spanish Law Societies and of the Bar Associations and their respective associate bodies shall regulate and organise the services of free legal advice, defence and representation through their Governing Bodies, guaranteeing, in all cases, that they are provided continuously and according to criteria of functionality and efficiency in the application of the public funds made available to them. [~]

The Law Society shall provide advisory services for applicants for legal aid, in order to assist and guide their claims. [~]

Such advice shall be free for applicants in all cases. [~]

The Law Society shall provide legal aid applicants the necessary information in relation to fulfilment of the requisites for this to be granted, as well as assistance in drafting the relevant applications. [~]

Article 23. [~]

Professional autonomy and professional discipline [~]

The professionals belonging to the legal aid services to whom this Act refers shall perform their activity with freedom and independence of criteria, subject to the ethical regulations and the rules that discipline operation of the legal aid services by their professional associations. [~]

Article 24. [~]

Distribution by rota [~]

The professional associations shall establish systems of objective, equitable distribution of the different rotas and means to officially appoint professionals. [~]

Such systems shall be public for all the members of the professional associations and may be consulted by legal aid applicants. [~]

Except where it is not necessary due to the reduced amount of activity, Law Societies shall establish permanent duty shifts to provide detainees the legal advice service. [~]

Article 25. [~]

Training and specialisation [~]

El Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa.

Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios profesionales, sin perjuicio de los requisitos complementarios que puedan establecer las Comunidades Autónomas competentes.

Artículo 26.

Responsabilidad patrimonial.

En lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los Colegios de Abogados y de Procuradores estarán sujetos a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones públicas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPITULO IV

Designación de abogado y de procurador de oficio

Artículo 27.

Efectos del reconocimiento del derecho.

El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la designación de abogado y, cuando sea preciso, de procurador de oficio, sin que en ningún caso puedan actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente elegido, o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renunciara por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el Colegio en el que se halle inscrito.

Si el derecho no fuera reconocido, los profesionales intervenientes podrán percibir de sus defendidos o representados los honorarios correspondientes a las actuaciones practicadas.

Artículo 28.

Renuncia a la designación.

The Ministry of Justice and Internal Affairs, on the basis of a report by the General Councils of the Law Societies and of the Bar Associations of Spain, shall establish the minimum general requisites of training and specialisation required to provide legal aid services, in order to assure quality standards and professional skills that guarantee the constitutional right to defence. [~]

Fulfilment of those requisites shall be mandatory for all the Professional Associations, notwithstanding the complementary requisites that may be established by the competent Autonomous Communities. [~]

Article 26. [~]

Financial liability [~]

With regard to operation of the legal aid services, the Law Societies and the Bar Associations shall be subject to the same principles of financial liability established for the Public Administrations under Act 30/1992, of the 26th November, on the Legal Regime of Public Administrations and the Common Administrative Procedure. [~]

CHAPTER IV [~]

Official Appointment Of A Solicitor And A Barrister-At-Law [~]

Article 27. [~]

Effects of recognition of the benefit [~]

Recognition of the benefit of legal aid shall involve official appointment of a solicitor and, when necessary, a barrister-at-law, without it being possible, in any case, for an officially appointed solicitor to act with a freely chosen barrister-at-law, or vice-versa, except when the freely chosen professional issues renounces in writing to his fees or charges before the holder of the benefit of legal aid and before the Association where he is registered. [~]

If the benefit is not recognised, the professionals acting may receive the relevant fees for the actions carried out from their clients or parties they represent. [~]

Article 28. [~]

Renunciation of appointment [~]

Quienes tengan derecho en los términos previstos en esta Ley a la asistencia jurídica gratuita podrán, no obstante lo previsto en el artículo anterior, renunciar expresamente a la designación de abogado y procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza debiendo constar expresamente este extremo en la solicitud y afectando simultáneamente esta renuncia al abogado y procurador.

La renuncia posterior a la designación, que, asimismo, deberá afectar simultáneamente al abogado y procurador designados de oficio, tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los correspondientes Colegios Profesionales y no implicará la pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 29.

Especialidades del orden jurisdiccional penal.

En el orden penal se aplicarán, además de las reglas contenidas en la presente Ley, las garantías previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de asegurar, en todo caso, el derecho a la defensa desde el mismo momento de la detención.

Artículo 30.

Aplicación de fondos públicos.

La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita sólo podrá ser retribuida con cargo a los fondos públicos contemplados en el artículo 37, cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en esta Ley.

Artículo 31.

Obligaciones profesionales.

Los abogados y procuradores designados desempeñaran sus funciones de asistencia y representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la Ley.

Those who are entitled to the benefit of legal aid, pursuant to the provisions contained in this Act, may, notwithstanding the provisions contained in the preceding Article, specifically renounce the official appointment of a solicitor and barrister-at-law freely appointing professionals in whom they trust, and that particular must be specifically recorded in the application and that renunciation shall simultaneously affect both the solicitor and the barrister-at-law. [~]

Subsequent renunciation of the appointment that, likewise, shall simultaneously affect the officially appointed solicitor and barrister-at-law, must be specifically notified to the Legal Aid Commission and to the relevant Professional Associations and this shall not imply loss of the other services recognised when granting the benefit of legal aid. [~]

Article 29. [~]

Peculiarities related to the criminal jurisdictional order. [~]

In the criminal order, in addition to the rules this Act contains, the guarantees foreseen in the Criminal Procedure Act shall also be applied in order to ensure, in all cases, the right to defence right from the very moment of detention. [~]

Article 30. [~]

Application of public funds [~]

Intervention by officially appointed professionals to advise, defend and represent clients free of charge may only be remunerated from the public funds described in Article 37, when there is specific recognition of the benefit of legal aid made pursuant to the provisions contained herein. [~]

Article 31. [~]

Professional obligations [~]

The solicitors and barristers-at-law appointed shall perform their duties of advising and representing in a real, effective manner until conclusion of the proceedings at the judicial instance concerned and, when appropriate, enforcement of the judgments, if the procedural actions in which these take place arise within the two years following the judicial resolution handed down at the instance, notwithstanding the effect of the causes of renunciation or excuse foreseen by the Act. [~]

Sólo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa. Para ello deberá concurrir un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los Colegios.

La excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde la notificación de la designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación.

Artículo 32.

Insostenibilidad de la pretensión.

Cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los seis días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.

Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o sin que el abogado pida la interrupción del mismo por falta de la documentación necesaria para evaluar la pretensión, éste quedará obligado a asumir la defensa. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, la defensa del acusado o imputado será obligatoria.

Artículo 33.

Tramitación.

1. Solicitudada por el abogado la interrupción del plazo previsto en el artículo anterior, por falta de la documentación necesaria, la Comisión requerirá al interesado para que la presente en un plazo máximo de diez días.

Transcurrido este plazo sin que el interesado haya presentado dicha documentación, la Comisión archivará la solicitud.

Presentada la documentación, ésta se aportará al abogado, reanudándose el plazo para analizar la viabilidad de la pretensión.

Si la Comisión estima que la documentación con la que cuenta el abogado, en el momento de la solicitud, es suficiente para analizar la viabilidad de la pretensión principal, inadmitirá la solicitud de interrupción, reanudándose el plazo para formulación de la insostenibilidad desde la notificación de la resolución de inadmisión.

Only in the criminal order may the solicitors appointed decline the defence, to which end there must be a fair and personal reason, which shall be appraised by the Dean of the Law Society. [~]

The excuse must be filed within the term of three days from notification of the appointment and resolved within the term of five days from it being lodged. [~]

Article 32. [~]

Unsustainable nature of the claim [~]

When the Solicitor appointed to a case considers the claim the party aims to lodge to be unsustainable, he must so notify the Legal Aid Commission, within 15 days following his appointment, stating the legal reasons on which his decision is based. [~]

After that term has elapsed without such a notification being given, or without the Solicitor applying for interruption due to lack of the necessary documentation to assess the claim, he shall be bound to take on the defence.¹⁴ Except as provided in the preceding Article, defence of the accused or indicted shall be mandatory. [~]

Article 33. [~]

Procedure [~]

1. Once the solicitor has applied for interruption of the term foreseen in the preceding Article, due to lack of the necessary documentation, the Commission shall require the party concerned to submit it within a maximum term of ten days. [~]

Should that term elapse without the party concerned having submitted that documentation, the Commission shall set aside the application. [~]

Once the documentation has been submitted, it shall be conveyed to the solicitor and the term to analyse the feasibility of the claim shall recommence. [~]

Should the Commission consider that the documentation the solicitor has, at the moment of the application, is sufficient to analyse the feasibility of the principal claim, it shall not accept the application for interruption, recommencing the term to formulate non-sustainability from the notification of the resolution not to admit it. [~]

2. Formulada la insostenibilidad de la pretensión, la Comisión recabará del Colegio de Abogados un dictamen sobre su viabilidad, que deberá emitirse en el plazo de seis días. Se solicitará, asimismo, informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio de Abogados coincidiera con el del abogado designado.

Dicho informe se emitirá en el plazo de seis días.

Artículo 34.

Nombramiento de segundo abogado.

Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensión, se procederá al nombramiento de un segundo abogado.

Los dictámenes emitidos por el Colegio de Abogados y por el Ministerio Fiscal serán aportados al nuevo abogado, para quien será obligatoria la defensa.

En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran indefendible la pretensión, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimará la solicitud.

Artículo 35.

Insostenibilidad en vía de recurso.

El mismo procedimiento previsto en los artículos anteriores se seguirá cuando se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia correspondiente, si el abogado del recurrente considerase inviable la pretensión.

El cómputo del plazo para la interposición de los recursos quedará suspendido hasta tanto se resuelva materialmente la viabilidad de la pretensión.

En el orden penal y respecto de los condenados no cabrá formular insostenibilidad de la pretensión.

Artículo 36.

Reintegro económico.

1. Si en la sentencia que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa de aquélla.

2. Once non-sustainability of the claim has been formulated, the Commission shall obtain a finding from the Law Society on its feasibility, which must be issued within the term of 15 days.¹⁵ It shall also request a reasoned report by the Public Prosecutor when the finding by the Law Society coincides with that of the solicitor appointed. [~]

That report shall be issued within the term of six days. [~]

Article 34. [~]

Appointment of a second solicitor [~]

Should the Law Society or the Public Prosecutor deem the claim to be defensible a second solicitor shall be appointed. [~]

The findings issued by the Law Society and the Public Prosecutor shall be provided to the new solicitor, for whom it shall be mandatory to take on the defence. [~]

In the event of the Law Society and the Public Prosecutor considering the claim to be unfeasible, the Legal Aid Commission shall reject the application. [~]

Article 35. [~]

Non-sustainability on appeal [~]

The same procedure foreseen in the preceding Articles shall be followed in the event of appeals to be lodged against resolutions that have put an end to the proceedings at the relevant instance, if the solicitor of the appellant considers the claim unfeasible. [~]

The calculation of the term to lodge the appeals shall be suspended until the feasibility of the claim is materially resolved. [~]

In criminal cases and with regard to those condemned, non-sustainability of the claim may not be alleged. [~]

Article 36. [~]

Reimbursement [~]

1. Should the judgment that puts an end to the proceedings contain a costs award in favour of the party that obtained recognition of the benefit of legal aid, or whomever has this legally recognised, the opposing party must pay the costs caused in its defence. [~]

2. Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil.

Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley.

3. Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita, deberá éste pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido.

Si excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiendo a prorrata sus diversas partidas.

4. Cuando se reconozca el derecho a asistencia jurídica gratuita para procesos en los que proceda la petición de «litis expensas» y éstas fueren concedidas en resolución firme a favor de la parte que litiga con el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita, el Letrado y procurador intervenientes podrán exigir a ésta el pago de sus honorarios, hasta el importe total de la partida aprobada judicialmente para este concepto.

5. Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio conforme a las reglas contempladas en los apartados anteriores, estarán obligados a devolver las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso.

Para el cálculo de sus honorarios y derechos, se estará a las normas sobre honorarios de abogados de cada Colegio, así como a los aranceles de los procuradores vigentes en el momento de la sustanciación del proceso.

CAPITULO V

Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita

Artículo 37.

Subvención.

2. When the judgment that puts an end to the proceedings condemns the party that obtained recognition of the benefit of legal aid, or the party that has this legally required, to pay costs, it shall be bound to pay those arising from its defence and those of the opponent, if his financial position improves within the three years following conclusion of the proceedings, and meanwhile the prescription term of Article 1,967 of the Civil Code shall be interrupted.
[~]

It shall be presumed that the person has improved his financial position if his revenue and financial means for all items exceed double the module foreseen in Article 3, or if the circumstances and conditions taken into account to recognise the benefit pursuant to this Act have materially changed. [~]

3. When the judgment that puts an end to the proceedings does not contain a specific award of costs, if the beneficiary of legal aid wins the suit, he must pay the costs arising from his defence, as long as these do not exceed one third of the amount obtained therefrom. [~]

If it were to be exceeded, the amount shall be reduced to that third, covering to the different items pro-rata. [~]

4. When the benefit of legal aid is recognised in proceedings in which it is appropriate to petition for costs and these are granted in a final resolution in favour of the party litigating with the benefit of legal aid, the solicitor and barrister-at-law acting may require him to pay their fees, up to the total amount of the heading judicially approved for such item. [~]

5. Once payment is obtained by the officially appointed professionals, pursuant to the rules set forth in the preceding sections, they shall be bound to return the sums eventually received from public funds for their intervention in the proceedings. [~]

In order to calculate their fees and tariffs, the rules on the fees of solicitors of each Law Society shall apply, as well as the barristers-at-law' tariffs in force at the moment of substantiation of the proceedings.
[~]

CHAPTER V [~]

Subsidisation And Supervision Of The Legal Aid Services [~]

Article 37. [~]

Subsidisation [~]

El Ministerio de Justicia e Interior subvencionará, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores.

El importe de la subvención se aplicará fundamentalmente a retribuir las actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta Ley, cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Artículo 38.

Gastos de funcionamiento.

El importe máximo de la subvención que podrá ser destinado por los Colegios profesionales a atender el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas, no podrá superar en ningún caso el 8 por 100 del crédito total consignado en el presupuesto de cada ejercicio.

Artículo 39.

Gestión colegial de la subvención.

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de España distribuirán entre los Colegios de Abogados y de Procuradores el importe de la subvención que corresponda a la actividad desarrollada por cada uno.

Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto entidades colaboradoras para la gestión de la subvención, estarán sujetos a las obligaciones establecidas para dichos sujetos por la Ley General Presupuestaria.

Artículo 40.

Retribución por baremo.

The Ministry of Justice and Internal Affairs shall subsidise implementation and provision of the legal aid services by the Law Societies and the Bar Associations against its budgetary assignments. The amount of the subsidy shall fundamentally be applied to remunerate the professional actions foreseen in sections 1 to 3 of Article 6 of this Act, when they are intended for those who have obtained recognition of the benefit of legal aid. [~]

Article 38. Operating expenses The implementing regulations shall establish the system through which the expense incurred by the General Councils of the Law Societies and the Bar Associations respectively to operate the legal aid services, the units entrusted with providing citizens with advice and orientation prior to the proceedings and the provisional classification of the claims applied for shall be subsidised from the budgetary assignments of the Ministry of Justice. [~]

Such a system shall in any case respect the following rules: [~]

a) The subsidy shall be determined for each Professional Association using a compensatory module system per case dealt with; b) Until that requisite is fulfilled, the Professional Associations shall receive the amount obtained by applying 8 per cent of the economic expense generated in each liquidation period for the professional activities mentioned in the preceding Article. Provision drafted pursuant to Additional Provision 30 of Act 14/2000, of 29th December, on tax, administrative and social measures. [~]

Article 39. [~]

Management of the subsidy by the Professional Associations [~]

The General Councils of the Law Societies of Spain and of the Bar Associations of Spain shall distribute the relevant sum of the subsidy for the activity performed by the different Law Societies and Bar Associations. [~]

The General Councils and the Professional Associations, as collaborating entities in management of the subsidy, shall be subject to the obligations established for such entities by the General Budgetary Act. [~]

Article 40. [~]

Remuneration by scale [~]

En atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los profesionales designados de oficio, se establecerán, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de España, las bases económicas y módulos de compensación por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 41.

Quejas y denuncias.

Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita darán traslado a los Colegios profesionales correspondientes a su ámbito territorial de las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones de los profesionales encargados de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de aquellas actuaciones judiciales que resultaren procedentes.

Los Colegios estarán obligados a comunicar a las citadas Comisiones las resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes disciplinarios que, en su caso, fueran incoados.

Dichas resoluciones podrán ser recurridas por las Comisiones.

CAPITULO VI

Régimen disciplinario

Artículo 42.

Correcciones disciplinarias.

El régimen disciplinario de los abogados y procuradores de los servicios de asistencia jurídica gratuita se regirá por las mismas reglas establecidas con carácter general para el desempeño de dichas profesiones, con las siguientes especialidades:

- a) La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos tendrá siempre la consideración de falta muy grave.
- b) La imposición de sanciones por infracciones graves o muy graves, relacionadas con las actuaciones desarrolladas en aplicación de lo establecido en esta Ley, llevará aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 43.

Separación cautelar.

The financial bases and compensation modules for provision of legal aid services shall be established according to the types of procedures in which the officially appointed professionals intervene, following a report by the General Council of the Law Societies of Spain by the General Council of the Bar Associations of Spain. [~]

Article 41. [~]

Complaints and claims [~]

The Legal Aid Commissions shall inform the relevant Professional Associations of their territorial scope of the complaints or claims lodged due to the actions by the professionals assigned the legal aid services of their professional associations, notwithstanding the judicial actions that might be appropriate. [~]

The Professional Associations shall be bound to notify the said Commissions of the resolutions and measures adopted as a consequence of the disciplinary proceedings that may be inchoated, when appropriate. [~]

Such resolutions may be appealed against by the Commissions. [~]

CHAPTER VI [~]

Disciplinary Regime [~]

Article 42. [~]

Disciplinary corrections [~]

The disciplinary regime of solicitors and barristers-at-law providing legal aid services shall be governed by the same rules established in general terms for performance of those professions, with the following specifications: [~]

- a) Undue receipt of fees, charges or financial benefits shall always be considered a very serious offence; [~]
- b) Penalties imposed for serious or very serious offences related to actions carried out in application of the provisions established under this Act shall give rise, in all cases, to barring the professional from providing legal aid services. [~]

Article 43. [~]

Provisional barring [~]

Abierto un expediente disciplinario por un Colegio profesional como consecuencia de quejas o denuncias formuladas por los usuarios de los servicios de asistencia jurídica gratuita, y cuando la gravedad de los hechos denunciados así lo aconseje, podrá acordarse la separación cautelar del servicio del profesional presuntamente responsable de aquellos hechos, por un período máximo de seis meses hasta tanto se resuelva el expediente disciplinario incoado al efecto.

CAPITULO VII

Aplicación en España de tratados y convenios internacionales sobre asistencia jurídica gratuita

Artículo 44.

Autoridad Central.

El Ministerio de Justicia e Interior, a través de la Autoridad Central receptora de la aplicación en España del Convenio Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita de 27 de enero de 1977 y del Convenio de La Haya de acceso internacional a la Justicia de 25 de octubre de 1980, formulará ante las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita las solicitudes de justicia gratuita formuladas al amparo de dichos Convenios.

Artículo 45.

Tramitación.

La tramitación de las solicitudes de justicia gratuita a que se refiere el artículo anterior, se ajustará a las reglas de procedimiento establecidas en esta Ley, con las siguientes excepciones:

- a) El plazo para la impugnación prevista en el artículo 20 será de dos meses.
- b) El plazo para la subsanación de deficiencias contemplado en el artículo 14 será de dos meses, contados a partir de la fecha en que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita notifique la insuficiencia documental.
- c) Los documentos presentados estarán redactados o traducidos al castellano, quedando dispensados de cualquier formalidad de legalización o apostilla.

CAPÍTULO VIII

Asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos

Sección 1.^a Normas generales

Artículo 46.

Ámbito de aplicación.

When disciplinary proceedings are taken by a Professional Association due to complaints or claims by users of the legal aid services, and when the severity of the facts denounced makes this advisable, provisional barring from service of the professional supposedly responsible for those facts may be decided for a maximum period of six months, until the disciplinary proceedings inchoated to that end are resolved. [~]

CHAPTER VII [~]

Application In Spain Of International Treaties And Conventions On Legal Aid [~]

Article 44. [~]

Central Authority [~]

The Ministry of Justice and Internal Affairs, through the Central Authority that receives the application in Spain pursuant to European Agreement on the Transmission of Application for Legal Aid of 27th January 1977 and The Hague Convention on International Access to Justice of 25th October 1980, shall formulate the applications for legal aid under those Conventions before the Legal Aid Commissions. [~]

Article 45. [~]

Procedure [~]

The procedure for applications for legal aid to which the preceding Article refers shall follow the procedural rules established in this Act, with the following exceptions: [~]

- a) The term to challenge foreseen in Article 20 shall be two months; [~]
- b) The term to correct the deficiencies observed pursuant to Article 14 shall be two months, as of the date on which the Legal Aid Commission notifies of the documentary insufficiency; [~]
- c) The documents submitted shall be drafted in or translated into Spanish, any legalisation or apostille formalities being waived. [~]

CHAPTER VIII [~]

Legal Aid In Cross-Border Disputes In The European Union¹⁶ [~]

Section 1. General Provisions [~]

Article 46. [~]

Scope of application [~]

1. En los litigios transfronterizos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita regulada en este Capítulo exclusivamente las personas físicas, que sean ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros.

A los efectos de este Capítulo, se entenderá por Estado miembro de la Unión Europea todos los Estados miembros excepto Dinamarca.

2. El beneficio de asistencia jurídica gratuita se reconocerá únicamente en los litigios en materia civil o mercantil, así como en los procedimientos extrajudiciales en estas mismas materias cuando la ley los imponga a las partes o el Juzgado o Tribunal remita a éstas a dichos procedimientos.

En aplicación del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el beneficio de asistencia jurídica gratuita se reconocerá, igualmente, en los litigios transfronterizos derivados de un contrato de trabajo.

La asistencia jurídica gratuita podrá concederse también, cuando se cumplan los requisitos que se exigen en esta ley, para:

- a) La ejecución de sentencias dictadas por los Tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea en los que se hubiera obtenido el beneficio de la justicia gratuita.
- b) La ejecución de documentos públicos con fuerza ejecutiva.

3. En el ámbito de aplicación de este capítulo, sus disposiciones prevalecerán entre los Estados miembros sobre los convenios y tratados multilaterales y bilaterales ratificados por ellos.

En las relaciones con los demás Estados, la aplicación de este capítulo no afectará a los restantes convenios y tratados multilaterales y bilaterales ratificados por España.

Artículo 47.

Litigios transfronterizos.

1. A los efectos de esta ley, se entiende por litigio transfronterizo aquel en el que la parte que solicita la asistencia jurídica gratuita reside habitualmente o está domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquel otro donde se halle el Juzgado o Tribunal competente para su conocimiento o en el que deba ejecutarse la resolución.

The benefit of legal aid regulated under this Chapter shall only be granted to individuals who are citizens of the European Union or nationals of third parties who legally reside in one of the Member States. [~]

For the purposes of this Chapter, a Member State of the European Union shall be understood to be all the Member States except Denmark. [~]

The benefit of legal aid shall solely be recognised in disputes on civil or commercial matters, as well as extra-judicial proceedings on these same matters when the law imposes them on the parties, or the Court of Law orders remission to such proceedings. [~]

Pursuant to Council Regulation (EC) no. 44/2001, of 22nd December 2000, on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, the benefit of legal aid shall likewise be recognised in cross-border disputes arising from a labour contract. [~]

Legal aid may also be granted when the requisites established for this Act are fulfilled for: [~]

- a) Enforcement of judgments handed down by the courts of other Member States of the European Union in which the benefit of legal aid has been obtained; [~]
- b) Enforcement of authentic instruments with executive force. [~]

3. Within the scope of application of this Chapter, its provisions shall prevail between the Member States with regard to the multilateral and bilateral conventions and treaties ratified by them. [~]

In relations with other States, application of this Chapter shall not affect the remaining multilateral and bilateral conventions and treaties ratified by Spain¹⁷. [~]

Article 47. [~]

Cross-border disputes [~]

1. For the purposes of this Act, cross-border disputes are understood as those in which the party applying for legal aid is domiciled or habitually resides a Member State of the European Union other than that where the competent tribunal to hear sits, or where the resolution is to be enforced. [~]

2. Para la determinación del Estado miembro en el que está domiciliada una parte del litigio transfronterizo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

3. El momento que se tendrá en cuenta para determinar si existe un litigio transfronterizo será el de presentación de la solicitud con arreglo a este Capítulo.

Artículo 48.

Autoridades expedidoras y receptoras.

En el ámbito de aplicación de este Capítulo, serán autoridades expedidoras y receptoras de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita a que se envíen o se reciban en España los Colegios de Abogados.

Sección 2^a.

Reconocimiento del derecho en España

Artículo 49.

Requisitos para el reconocimiento del derecho.

1. Quien solicite asistencia jurídica gratuita al amparo de esta Sección habrá de residir o estar domiciliado en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España.

Para el reconocimiento de este derecho se observarán los requisitos establecidos en los artículos 3 a 5 de esta ley.

2. Los límites económicos establecidos en esta ley no impedirán que el solicitante que los supere pueda obtener el beneficio si prueba que no puede hacer frente a los gastos procesales debido a las diferencias en el coste de la vida entre el Estado miembro de su residencia o domicilio y España.

En tal caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento por el solicitante de los criterios de carácter económico aplicables en el Estado miembro de su domicilio o residencia habitual para conceder la justicia gratuita.

Artículo 50.

Contenido material del derecho.

1. El derecho de asistencia jurídica gratuita reconocido al amparo de esta Sección comprende todas las prestaciones indicadas en el artículo 6, con excepción de su apartado 2, con la extensión temporal del artículo 7, y, además:

a) Los servicios de interpretación.

2. In order to determine the Member State in which a party to the cross-border disputes is domiciled, the provisions set forth in Article 59 of Council Regulation (EC) no. 44/2001, of 22nd December 2000, on jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, shall apply. [~]

16.3. The moment that shall be taken into account to determine whether there is a cross-border disputes shall be that of presentation of the application pursuant to this Chapter. [~]

Article 48. [~]

Issuing and receiving authorities [~]

Within the scope of application of this Chapter, the authorities issuing and receiving the applications for legal aid sent from or received in Spain shall be the Law Societies. [~]

Section 2. [~]

Recognition Of The Benefit In Spain [~]

Article 49. [~]

Requisites to have the benefit recognised. [~]

Whoever applies for legal aid pursuant to the provisions of this Section must reside or be domiciled in a Member State of the European Union other than Spain. [~]

In order to be recognised this benefit, the requisites established in Articles 3 to 5 of this Act shall be abided by. [~]

The financial limits established in this Act shall not prevent applicants who exceed them from obtaining the benefit if they prove that they cannot afford the procedural expenses due to the differences in the cost of living between the Member State of residence or domicile and Spain. [~]

In such case, fulfilment by the application of the applicable financial criteria in the Member State of domicile or usual residence to grant legal aid shall be taken into account. [~]

Article 50. [~]

Substantive content of the benefit [~]

1. The benefit of legal aid recognised pursuant to the provisions of this Section include all the services indicated in Article 6, with the exception of its Section 2, within the time range of Article 7, and also: [~]

a) Interpretation services; [~]

b) La traducción de los documentos presentados por el beneficiario a instancias del Juzgado o Tribunal o de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto.

c) Los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante, cuando las normas aplicables o el Juzgado o Tribunal requieran su comparecencia personal para la defensa de su pretensión, y el Juzgado o Tribunal decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración.

Al objeto de considerar si es necesaria la asistencia personal del solicitante, de un testigo o de un perito, los Juzgados y Tribunales tendrán en cuenta lo previsto en el Reglamento (CE) número 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, así como, en su caso, otros convenios o normas aplicables.

d) La defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial cuando, no siendo legalmente preceptiva la intervención de estos profesionales, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante Auto motivado en vista de la complejidad del asunto o para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

2. Los documentos remitidos por las autoridades expedidoras competentes en aplicación de este Capítulo estarán exentos de legalización y de cualquier otra formalidad equivalente.

Artículo 51.

Solicitud del derecho.

1. Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que provengan de otro Estado miembro de la Unión Europea para un litigio transfronterizo se presentarán ante el Colegio de Abogados del lugar donde se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquélla se solicita o ante el que se solicite el reconocimiento o ejecución de una resolución.

Cuando el Colegio de Abogados que recibe la solicitud estime que es incompetente para su tramitación, la remitirá al Colegio que considere competente, de manera razonada.

b) Translation of the documents submitted by the beneficiary at the request of the Court of Law or competent authority, which are necessary to resolve the case; [~]

c) Travel expense to be borne by the applicant, when the applicable regulations, or the Court of Law require his personal appearance to defend his claim, and the Court of Law decides that there are no other satisfactory means to take the statement. [~]

In order to consider whether personal assistance by the applicant, a witness or an expert is necessary, the Court shall take into account the provisions contained in Council Regulation (EC) no. 1206/2001 of 28th May 2001, on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters, as well as, when appropriate, other applicable conventions or provisions; [~]

d) Free defence and representation by a Solicitor and a Barrister-at-law in judicial proceedings when, while intervention by these professionals is not a legal requisite, it is specifically required by the Court of Law by a reasoned order, considering the complexity of the matter or to guarantee equality of the parties in the process. [~]

2. The documents sent by the competent issuing authorities implementing this Chapter shall be exempt of legalisation and any other equivalent formality. [~]

Article 51. [~]

Application for the benefit [~]

Applications for legal aid from a Member State of the European Union for cross-border disputes that are to be lodged with the Law Society of the place where the Court of Law that is to hear the main suit for which the application is made sits, or before which recognition or enforcement of a resolution is requested. [~]

If the Law Society that receives the application considers that it is not competent to process it, it shall submit it to the Law Society it considers competent, providing the reasons for this. [~]

Si éste rechazara también la solicitud, la enviará al Consejo General de la Abogacía Española para que decida cuál es el Colegio de Abogados de la circunscripción del Juzgado o Tribunal al que corresponde su tramitación, determinado éste de acuerdo con las reglas de los artículos 44 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o, en su caso, en las normas internacionales que resulten de aplicación.

Cuando se solicite el reconocimiento excepcional del derecho por concurrir cualesquiera de las circunstancias previstas en el artículo 5 de esta ley o cuando se alegue la imposibilidad de hacer frente a los gastos procesales prevista en su artículo 49.2, el Colegio de Abogados remitirá inmediatamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la solicitud y documentación para que resuelva sobre la pretensión deducida.

Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial establecido al efecto, y podrán presentarse bien directamente por el interesado, bien a través de la autoridad expedidora competente del Estado miembro en que el solicitante tenga su residencia habitual o su domicilio.

Las solicitudes se acompañarán de los documentos en los que se funde la pretensión.

2. En el supuesto de concurrencia de litigantes en un mismo proceso, el reconocimiento del derecho deberá ser instado de manera individualizada para cada uno de los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.

3. El Ministerio de Justicia, a través del órgano competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificará a la Comisión Europea los nombres y direcciones de las autoridades receptoras o expedidoras competentes en España, los ámbitos geográficos sobre los que tienen competencia, los medios para recibir las solicitudes y, en su caso, la lengua o las lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad, además del español y, en su caso, de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en la que tengan su sede las autoridades expedidoras y receptoras, en las cuales se aceptará que se cumplimenten las solicitudes de justicia gratuita así como la documentación acreditativa correspondiente.

If that Law Society also rejects the application, it shall be sent to the General Council of Law Societies for it to decide which Law Society is that of the seat of the Court of Law that is to process it, determining this pursuant to the rules of Articles 44 and following of Act 1/2000, of 7th January, on Civil Procedure or, when appropriate, the international provisions that may be applicable. [~]

When exceptional recognition of the benefit is requested due to any of the circumstances foreseen in Article 5 of this Act arising, or if it is alleged that it is impossible to afford the procedural expenses as foreseen in Article 49.2 of this Act, the Law Society shall immediately convey to the Legal Aid Commission the application and documentation to resolve on the claim arising. [~]

Applications shall be made using the official form established for that purpose, and they may be filed either directly by the person concerned, or through the competent issuing authority in the Member State in which the applicant usually resides or has his domicile. [~]

Applications shall be accompanied by the documents upon which the claim is based. [~]
In the event of concurrence of litigants in the same proceedings, recognition of the benefit must be established individually for each one of the parties concerned, pursuant to the provisions set forth in Article 12. [~]

The Ministry of Justice, through the competent body by virtue of the provisions set forth in Article 10 of the Act on the Legal Regime of Public Administrations and the Common Administrative Procedure, shall notify the European Commission of the names and addresses of the competent authorities to receive or issue in Spain, of the geographical areas over which they have competence, of the means to receive the applications and, when appropriate, of the official language or languages of the Autonomous Communities, in addition to Spanish, in which applications for legal aid may be filled in, and the relevant documentary evidence be produced. [~]

Cuando una solicitud o la documentación correspondiente se reciban en una lengua no aceptada en España, serán inmediatamente devueltas a quien los hubiera presentado para que proceda a su traducción y presentación en el plazo de 15 días contados desde la recepción del requerimiento.

4. Una vez presentada la solicitud, se seguirán en estos casos las normas previstas en los artículos 13 a 21 con la especialidad de que el plazo de subsanación de deficiencias del artículo 14 será de 15 días.

Asimismo, se observarán las normas recogidas en el Capítulo IV, en lo que resulten de aplicación. En todo caso, deberá informarse al solicitante sobre la tramitación de su solicitud, cuya resolución será motivada en caso de denegación total o parcial.

5. En los casos en que haya de tener lugar en España el reconocimiento o ejecución de una resolución judicial dictada por un Juzgado o Tribunal de otro Estado miembro de la Unión Europea en el que se hubiera obtenido el beneficio de la justicia gratuita, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará mediante solicitud en la que se acredite el reconocimiento del derecho en ese Estado y el cumplimiento de los requisitos del artículo 49. Se podrá conceder, asimismo, el beneficio de la asistencia jurídica gratuita para la ejecución en España de documentos públicos con fuerza ejecutiva cuando el solicitante acredite el cumplimiento de los requisitos del artículo 49.

Sección 3.^a Reconocimiento del derecho en otros Estados miembros

Artículo 52.

Derechos en España.

Las personas físicas que tengan su residencia habitual o su domicilio en España que pretendan beneficiarse de asistencia jurídica gratuita en otro Estado miembro de la Unión Europea para un litigio transfronterizo de los previstos en este Capítulo podrán acceder en España a los siguientes derechos:

a) Asistencia de los servicios de orientación jurídica del Colegio de Abogados correspondiente a la residencia o domicilio del solicitante hasta que se presente la solicitud de justicia gratuita en el Estado miembro donde se halle el Tribunal.

Esta asistencia incluirá el asesoramiento al solicitante para que la solicitud vaya acompañada de toda la documentación acreditativa que sea necesaria para que pueda resolverse sobre ella.

When an application or the relevant documentation are received in a language that is not accepted in Spain, they shall immediately be returned to the party that submitted them, in order to proceed to have them translated and lodged within the term of 15 days from receipt of the requirement to do so. [~]

Once the application is submitted in these cases, the provisions contained in Articles 13 to 21 shall be followed, with the specification that the term to correct deficiencies under Article 14 shall be 15 days. [~]

The applicable regulations established in Chapter IV shall also be observed. In all cases, the applicant shall be informed of the processing of his application, the resolution of which shall be motivated in the event of total or partial refusal. [~]

In cases in which recognition or enforcement of a judicial resolution handed down by a Court of Law of another Member State of the European Union in which the benefit of legal aid has been obtained is to take place in Spain, the benefit of legal aid shall be requested by an application that provides sufficient evidence of recognition of the benefit in that State and fulfilment of the requisites of Article 49. The benefit of legal aid may also be granted for enforcement in Spain of authentic documents with executive force, when the applicant provides sufficient evidence of fulfilment of the requisites of Article 49. [~]

Section 3. Recognition Of The Benefit In Other Member States [~]

Article 52. [~]

Benefit in Spain [~]

Individuals who have their usual residence or domicile in Spain who intend to benefit from legal aid in another Member State of the European Union for crossborder disputes as foreseen in this Chapter may obtain the following rights in Spain: [~]

a) Assistance by the legal orientation services of the Law Society of the residence or domicile of the applicant, until the application for legal aid is lodged in the Member State where the Court is located. [~]

Such assistance shall include advising the applicant in order for the application to be accompanied by all the necessary documentary evidence to permit a decision thereon; [~]

b) Traducción de la solicitud y de la documentación acreditativa necesaria que deba presentarse a las autoridades de dicho Estado miembro.

Artículo 53.

Tramitación.

1. Los derechos contemplados en el artículo 52 podrán solicitarse ante el Colegio de Abogados que corresponda a la residencia habitual o domicilio del solicitante.

Si el Colegio de Abogados estimara que la petición carece de modo manifiesto de fundamento o no entra dentro del ámbito de aplicación de este Capítulo, se lo notificará al solicitante en el plazo de cinco días, y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que decida de manera definitiva sobre la negativa a remitir la solicitud.

2. Correspondrá al Colegio de Abogados transmitir la solicitud de asistencia jurídica gratuita a las autoridades receptoras del Estado miembro de la Unión Europea donde se encuentre el Tribunal competente para el litigio de que se trate.

Se remitirá en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que la solicitud se encuentre cumplimentada en la lengua o en una de las lenguas aceptadas por el Estado miembro de la autoridad receptora y también los documentos acreditativos, traducidos, si fuera necesario, a alguna de dichas lenguas.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el solicitante podrá beneficiarse de los derechos contemplados en el artículo 52 y presentar por sí mismo la solicitud de justicia gratuita ante la autoridad receptora competente del Estado miembro en el que se halle el Tribunal o en el que deba ejecutarse la resolución.

Artículo 54.

Denegación del derecho.

Cuando la autoridad competente de otro Estado miembro deniega la solicitud de justicia gratuita realizada desde España con ejercicio de los derechos del artículo 52, se exigirá, si concurren las circunstancias previstas en el artículo 19, el reintegro de los gastos correspondientes a las traducciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.

b) Translation of the application and of the necessary documentary evidence that must be submitted to the authorities of that Member State. [~]

Article 53. [~]

Procedure [~]

1. The rights recognised in Article 52 may be applied for before the relevant Law Society of the usual place of residence or domicile of the applicant. [~]

Should the Law Society deem that the application is manifestly unfounded, or does not fall under the scope of application of this Chapter, the applicant shall be notified within the term of five days and the application shall be conveyed to the Legal Aid Commission, for it to definitively decide on the refusal to submit the application. [~]

2. It shall be the remit of the Law Society to submit the legal aid application to the competent authorities of the Member State of the European Union where the competent court for the dispute concerned sits. [~]

This shall be submitted within the term of 15 days from the date on which the application is submitted in the language, or in one of the languages accepted by the Member State of the receiving authority, along with the documentary evidence translated, if necessary, into any of those languages. [~]

3. Notwithstanding the provisions contained in the preceding Section, the application may use the rights recognised in Article 52 and personally lodge the application for legal aid before the competent receiving authority of the Member State where the Court is located, or where the resolution must be enforced. [~]

Article 54. [~]

Refusal of the benefit [~]

When the competent authority in another Member State rejects the application for legal aid filed from Spain exercising the right of Article 52, reimbursement of the relevant expenses of translations shall be demanded if the conditions foreseen in Article 19 are fulfilled. [~]

ADDITIONAL PROVISIONS [~]

Additional Provision One [~]

1. El capítulo I, los artículos 9, 10.1, 12 y 16 a 21 del capítulo II, los artículos 27 a 29 y 31 a 36 del capítulo IV, el capítulo VII, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, y la disposición derogatoria, se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.3.^a, 5.^a y 6.^a de la Constitución Española, sobre «Relaciones Internacionales», «Administración de Justicia» y «Legislación procesal», respectivamente.

2. Los artículos 25 y 26 del capítulo III y el capítulo VI, se dictan en virtud de la competencia del Estado reconocida en el artículo 149.1.18.^a de la Constitución Española, conforme al cual corresponde a éste dictar las «Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas».

3. Los restantes preceptos serán de aplicación en defecto de normativa específica de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión de medios para la Administración de Justicia.

Disposición adicional segunda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, la Cruz Roja Española tendrá reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar.

Igual derecho asistirá a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en los términos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Disposición adicional tercera. Los artículos que a continuación se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendrán la siguiente redacción:

1. El artículo 844 tendrá la siguiente redacción:

1. Chapter I, Articles 9, 10.1, 12 and 16 to 21 of Chapter II, Articles 27 to 29 and 31 to 36 of Chapter IV, Chapter VII, Additional Provisions Three, Four and Five, and the Repealing Provision, are adopted pursuant to the powers the State is attributed under Article 149.1.3, 5 and 6 of the Spanish Constitution, on “International Relations”, “Administration of Justice” and “Procedural Legislation”, respectively.¹⁸ [~]

2. Articles 25 and 26 of Chapter III and Chapter VI are handed down by virtue of the power the State is recognised under Article 149.1.18 of the Spanish Constitution, according to which it must hand down the “Bases of the Legal Regime of the Public Administrations”. [~]

3. The remaining provisions shall be applicable in the absence of specific regulations by the Autonomous Communities that have taken on the effective exercise of the powers on matters pertaining to providing means for the Administration of Justice. [~]

Additional Provision Two [~]

The provisions contained in Article 2 notwithstanding, the Spanish Red Cross shall be recognised the benefit of legal aid, without the need to evidence financial eligibility. [~]

The same right shall be held by the Consumers' and Users' Associations,pursuant to the provisions contained in Article 2.2 of Act 26/1984, of 19th July, on Defence of Consumers and Users.The benefit of legal aid, without having to provide evidence of financial eligibility,shall also be recognised to associations of public utility whose purposes includethe promotion and defence of the rights of disabled persons stated in Article 1.2of Act 51/2003, of 2nd December, on equal opportunities, non-discrimination and universal access.¹⁹ Additional Provision Three [~]

The Articles listed below of the Civil Procedure Act shall henceforth be drafted as follows: [~]

«Cuando el apelante tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, se le tendrá por personado en tiempo ante el Tribunal superior, si dentro del término del emplazamiento compareciere ante el mismo por sí o por medio de otra persona, solicitando la designación de abogado y procurador de oficio. La misma pretensión podrá deducir al hacerle el emplazamiento, en cuyo caso lo consignará el Secretario en la diligencia. En estos casos, la designación se efectuará conforme a lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y se entenderán con el Procurador nombrado de oficio todas las actuaciones en representación del apelante.»

Article 844 shall henceforth be drafted as follows: When the appellant is recognised the benefit of legal aid, he shall be considered to have appeared before the High Court in a timely manner if, within the term of the summons, he were to appear himself, or by means of another person, applying to be appointed a solicitor and barrister-at-law by the Court. The same request may be made when issuing the summons, in which case the Court Clerk shall take note thereof in the diligence. In these cases, the appointment shall be made pursuant to the provisions contained in the Legal Aid Act and all actions on behalf of the appellant shall be conducted through the Barrister-at-law appointed to represent the appellant.
[~]

2. El artículo 1.701 tendrá la siguiente redacción:
«Si la parte recurrente en queja tuviere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la designación de abogado y procurador que le defiendan y representen se efectuará conforme a lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el plazo de presentación del escrito de interposición del recurso se computará a partir de la comunicación de las designaciones, siempre que haya mediado solicitud de la parte dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia.»

Article 1.701 shall henceforth be drafted as follows: Should the party appealing in the suit be recognised the benefit of legal aid, the appointment of a solicitor and of a barrister-at-law to defend and represent him shall be performed pursuant to the provisions of the Legal Aid Act and the term to lodge the writ of appeal shall be calculated as from when notice be served of the appointments, as long as the party has applied within the ten days following notice being served of the judgment. [~]

3. El primer párrafo de la regla 6.^a del artículo 1.708, tendrá la siguiente redacción: «En los casos en que el recurso de casación fuere interpuesto por el Letrado designado en turno de oficio, tendrá siempre un plazo no inferior a los veinte días, contados desde el siguiente a aquél en que se disponga de las actuaciones para hacerlo, interrumpiéndose, si es necesario, a tal fin, el plazo de los cuarenta días fijados en el emplazamiento.»

Paragraph One of Rule 6 of Article 1.708 shall henceforth be drafted as follows: In cases in which a cassation appeal is lodged by the officially appointed Solicitor, he shall always have a term of not less than twenty days from that following the one in which the written record of the proceedings are provided to him, to which end, the term of forty days set in the summons shall be interrupted if necessary.
[~]

Disposición adicional cuarta.

Additional Provision Four [~]

Los artículos y rúbricas que a continuación se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tendrán la siguiente redacción:

The Articles and headings listed below of the Criminal Procedure Act shall henceforth be drafted as follows: [~]

1. El Título V del Libro I se denominará «Del derecho de defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales».

1. Title V of Book I shall be called “On the right to defence and to legal aid in criminal trials”. [~]

2. El artículo 121 tendrá la siguiente redacción:

«Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los procuradores que les representen, los honorarios de los abogados que les defiendan, los de los peritos que informen a su instancia y las indemnizaciones de los testigos que presentaren, cuando los peritos y testigos, al declarar, hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren.

Ni durante la causa ni después de terminada tendrán la obligación de satisfacer las demás costas procesales, a no ser que a ello fueren condenados.

El procurador que, nombrado por los que fueren parte en una causa, haya aceptado su representación tendrá la obligación de pagar los honorarios a los Letrados de que se valiesen los clientes para su defensa.

Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrán valerse de abogado y procurador de su elección; pero en este caso estarán obligados a abonarles sus honorarios y derechos, como se dispone respecto de los que no tengan reconocido dicho derecho, salvo que los profesionales de libre elección renunciaran a la percepción de honorarios o derechos en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.»

3. El último párrafo del artículo 875 tendrá la siguiente redacción: «Si el recurrente tuviese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita o apareciese declarado insolvente total o parcial, quedará obligado a responder de la cantidad referida, si viniere a mejor fortuna, en la forma que dispone el artículo 857.»

Disposición adicional quinta.

El artículo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, tendrá la siguiente redacción:

«1. La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, pero podrá utilizarla cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos, con las excepciones fijadas en el artículo 2, d), de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Article 121 shall henceforth be drafted as follows:
All those that are a party to a case, if not recognised the benefit of legal aid, shall be bound to pay the fees of the barristers-at-law representing them, the fees of the solicitors defending them, those of the expert witnesses issuing reports at their request and the compensations of the witnesses appearing, when the experts and witnesses, on depositing, have made such a claim and the Court of Law admits it. [~]

Neither during the case, nor after it has concluded, shall they be bound to pay the other procedural costs, unless they are condemned to the payment thereof.
[~]

Barristers-at-law who, having been appointed by those who are a party to a case, have agreed to represent them, shall be bound to pay the fees of the Solicitors the clients have made use of for their defence. [~]

Those who are recognised the benefit of legal aid may avail themselves of a solicitor and barrister-at-law of their choice, although in that case they shall be bound to pay their fees and tariffs, as provided with regard to those who are not recognised such benefit, except if the professionals freely agree to act pro bono pursuant to the provisions contained in Article 27 of the Legal Aid Act. [~]

The last paragraph of Article 875 shall henceforth be drafted as follows: Should the appellant be recognised the benefit of legal aid, or be declared fully or partially insolvent, he shall be bound to respond for the sum stated if he were to attain a better financial situation, in the manner provided under Article 857. [~]

Additional Provision Five [~]
Article 21 of the Labour Procedure Act, Consolidated Text approved by Royal Legislative Decree 2/1995, of 7th April, shall henceforth be drafted as follows: [~]

Defence by a solicitor shall be optional at first instance, except pursuant to the provisions of the following Article, although he may be used by any of the litigants, in which case they shall pay the respective fees or tariffs, with the exceptions established in Article 2, d), of the Legal Aid Act. [~]

2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social colegiado, lo hará constar en la demanda.

Asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado por procurador o graduado social colegiado, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio.

La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

3. Si en cualquier otra actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de Letrado, el Juez o Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.

4. La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social comportará la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones.»

Disposición adicional sexta.

Información al Ministerio de Justicia sobre los litigios transfronterizos.

A efectos estadísticos, los Colegios de Abogados enviarán semestralmente una relación de solicitudes de reconocimiento de asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos celebrados en los demás Estados miembros, con indicación expresa del Estado de que se trate, cuando el solicitante del derecho tenga su residencia habitual o su domicilio en España, así como de solicitudes de reconocimiento de asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos celebrados en España, con indicación expresa del Estado de residencia habitual o domicilio del solicitante del derecho, al Consejo General de la Abogacía Española, que éste remitirá al Ministerio de Justicia.

Disposición adicional séptima.

Empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Should the plaintiff intend to appear on trial counselled by a solicitor, or represented by a barrister-at-law or labour relations specialist member of the relevant professional association, he shall state this in the suit. [~]

Likewise, the defendant shall make that circumstance known to the Court of Law in writing, within two days following being summoned to trial, in order that, having notified the plaintiff of that intention, he may be represented by a barrister-at-law or labour relations specialist member of the relevant professional association, or appoint a solicitor within a further term of the same length, or apply for his official appointment. [~]

Failure to fulfil these requisites shall be considered renunciation by the party to the right to avail himself of a solicitor, barrister-atlaw or labour relations specialist member of the relevant professional association during the trial. [~]

If, in any other proceedings other than the trial hearing itself, any of the parties intend to act with a Solicitor's assistance, the Court of Law shall take the appropriate measures to guarantee the equality of the parties. [~]

The application for official appointment of a solicitor by workers and beneficiaries of the Social Security System shall suspend the peremptory terms of expiry, or interrupt those of prescription. [~]

Additional Provision Six. [~]

Information to the Ministry of Justice on cross-border disputes²⁰ [~]

For statistical purposes, the Law Societies shall send a list of applications for recognition of legal aid in cross-border disputes held with other Member States every six months, specifically mentioning the State concerned, when the applicant for the benefit is domiciled or is habitually resident in Spain, as well as applications for recognition of legal aid in cross-border disputes held in Spain, specifically stating the State of domicile or habitual residence of the party applying for the benefit, to the General Council of Law Societies, which shall submit it to the Ministry of Justice. [~]

Additional Provision Seven. [~]

Use of electronic, computer and telematic ²¹ means [~]

Las Administraciones Pùblicas competentes procurarán e impulsarán el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los trámites ligados al reconocimiento de derecho de asistencia jurídica gratuita, y en particular cuando se trate de los supuestos previstos en el Capítulo VIII de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Disposición adicional octava.

Sustitución de las referencias al salario mínimo interprofesional.

Todas las referencias contenidas en esta ley y en su normativa de desarrollo al salario mínimo interprofesional se entenderán hechas al indicador público de renta de efectos múltiples y su valoración se efectuará de conformidad con el artículo 3.

Disposición transitoria única.

Las solicitudes de justicia gratuita, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud. Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley, y en particular:

a) De la Ley de Enjuiciamiento Civil: - El inciso primero del número 4.^º del artículo 4, cuando dice «justicia gratuita».

- Los artículos 13 a 50, ambos inclusive.

- Las reglas 3.^a, 4.^a y 5.^a del artículo 1.708. - El artículo 1.719. b) De la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

- El artículo 119.

- El artículo 120.

- Los artículos 123 a 140, ambos inclusive.

- Los apartados 2, 4 y 5 del artículo 788. - El último párrafo del artículo 874.

The competent Public Administrations shall endeavour to use and to promote the use of electronic, computer and telematic means in the formalities related to recognition of the benefit of legal aid and, in particular, in the cases in Chapter 8 of Act 1/1996, of 10th January, on Legal Aid. [~]

Additional Provision Eight. [~]

Legal aid for victims of terrorism 22 [~]

Persons declared victims of terrorism who provide evidence of financial eligibility, pursuant to the provisions contained in Act 1/1996, of 10th January, on Legal Aid, are entitled to free representation and defence by a Solicitor and a Barrister-at-law in all the administrative processes and proceedings that directly or indirectly arise from the situation caused by that condition. [~]

In these cases, a same legal counsel shall under take on the defence of the victim. [~]

Such benefit shall also apply to the heirs in the case of death of the victim. In all cases, all victims of terrorist violence who apply shall immediately be provided free specialised legal defence, notwithstanding the fact that, should they subsequently not be recognised the benefit of legal aid, they must pay the Solicitor and Barrister-at-law the fees accrued for their intervention, as appropriate. [~]

The Law Societies shall take the necessary measures to officially appoint a solicitor on an urgent basis to guarantee that victims of terrorism are duly attended and defended. [~]

TRANSITIONAL PROVISION Sole Transitional Provision [~]

Applications for legal aid filed prior to enactment of this Act shall be governed by the regulations in force at the time of filing the application. [~]

REPEALING PROVISION [~]

Sole Repealing Provision [~]

All provisions that oppose the provisions of this Act are hereby repealed and, in particular: [~]

a) Of the Civil Procedure Act:-Section One of Number 4 of Article 4, where it says “legal aid”- Articles 13 to 50, both inclusive-Rules 3, 4 and 5 of Article 1,708-Article 1,719. [~]

- Los tres primeros párrafos del artículo 876. c) Del Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral: - Los artículos 25 y 26.

d) De la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956: - El artículo 132.

e) El artículo 6.3 del Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de septiembre, de régimen de los fondos de Garantía de Depósitos de Bancos Privados, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito.

f) El artículo 59.3 del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.

En el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley, el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará el Reglamento General de desarrollo de la misma, en el que se contendrán necesariamente los siguientes extremos:

a) Las normas de organización y funcionamiento de la Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

b) Normalización de los documentos a presentar por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.

c) El procedimiento para la aplicación de la subvención.

d) El sistema de determinación de las bases económicas y módulos de compensación con cargo a fondos públicos por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

e) El sistema de provisión de la asistencia pericial gratuita prevista en el apartado 6 del artículo 6.

Disposición final segunda.

La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Of the Criminal Procedure Act:-Article 119-Article 120-Articles 123 to 140, both inclusive-Sections 2, 4 and 5 of Article 788-The last paragraph of Article 874-The last three paragraphs of Article 876. c) Of Royal Legislative Decree 2/1995, of 7th April, approving the Consolidated Text of the Labour Procedure Act: -Articles 25 and 26. [~]

d) On the Contentious-Administrative Jurisdiction Regulation Act of 27th December 1956: -Article 132. [~]

e) Article 6.3 of Royal Decree Act 18/1982, of the 24th September, on the Regime of Deposit Guarantee Funds of Private Banks, Savings Banks and Lending Co-operatives. [~]

f) Article 59.3 of Royal Legislative Decree 1/1994, of 20th June, approving the Consolidated Text of the General Social Security Act. [~]

FINAL PROVISIONS [~]

Final Provision One [~]

Within the term of six months from publication of this Act, the Government, within the scope of its powers, shall hand down the general implementing regulations thereof, which shall contain the following particulars: [~]

a) The rules on organisation and operation of the Legal Aid Commissions; [~]

b) Standardisation of the documents to be filed by the legal aid applicants; [~]

c) The procedure to apply the subsidy; [~]

d) The system to determine the financial bases and compensation modules drawn on public funds to provide the legal aid services; [~]

e) The system to provide legal aid foreseen in Section 6 of Article 6. [~]

Final Provision Two [~]

This Act shall come into force six months after it is published in the “Official State Gazette”. [~]